

cedla
centro de estudios
para el desarrollo
laboral y agrario

Proyecto Control Ciudadano

***POLÍTICAS SOCIALES,
POBREZA Y TRABAJO EN EL
NEOLIBERALISMO***

Carlos Arze Vargas

N° 2

La Paz - Bolivia, noviembre de 2000

INDICE

PRESENTACIÓN

EL SIGNIFICADO DE LA POLÍTICA SOCIAL.....	1
LA ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL EN BOLIVIA.....	2
GASTO PÚBLICO PARA FINANCIAR LA POLÍTICA SOCIAL.....	4
CUÁLES SON LOS RESULTADOS EN MATERIA SOCIAL	5
NECESIDAD DE UNA VISIÓN CRÍTICA DE LA POBREZA Y DE LA POLÍTICA SOCIAL	7
BIBLIOGRAFIA.....	11

PRESENTACIÓN

No es fácil encontrar visiones alternativas a las ya establecidas, en estos tiempos en los que el monólogo de ideas se ha impuesto de manera tan penosa y evidente. El presente trabajo parece haberse propuesto justamente eso, salirse del esquema tradicional del pensamiento único acerca de la política social y la pobreza, con el objetivo de escarbar la evidencia empírica sobre las contradicciones esenciales del actual mundo capitalista.

En este sentido, lo que el investigador Carlos Arze señala, de manera franca y provocadora, es que, en el actual periodo neoliberal impulsado por la mundialización económica, ha campeado el cinismo en la búsqueda de soluciones al problema de la pobreza. A través de complejos entuertos conceptuales y reduccionismos economicistas, se ha puesto toda la esperanza en el enfoque actual de política social, sin mirar el fondo del problema: las condiciones favorables para la expansión del capital son las que están convirtiéndose en las causas centrales de la generación de pobreza.

Y es que el mundo del trabajo se ha convertido en el verdadero Talón de Aquiles para superar el círculo vicioso de la pobreza en el actual modelo económico. De esta manera, no basta que las cifras oficiales se enterquen en mostrar niveles muy bajos de desempleo abierto, ya que las condiciones precarias, de baja productividad y bajos ingresos de una gran parte del empleo en Bolivia devienen en obstáculos cuasi insalvables para superar la pobreza estructural de la sociedad. Es más, ni siquiera se puede alumbrar alguna esperanza hacia futuro con la mentalidad puesta sólo en el crecimiento económico, pues la manera en que se ha producido excedentes económicos en el país, en los tres lustros de vigencia del ajuste estructural, no ha previsto en ningún momento su distribución de manera equitativa; por el contrario, la concentración de la riqueza ha ido en aumento en la última década.

¿Será posible, entonces, dejar de lado nuestras preocupaciones acerca de cómo el neoliberalismo y el ajuste estructural se han olvidado sistemáticamente –además de interesadamente– de luchar contra las verdaderas causas de la pobreza?

Con estas reflexiones extraídas de ***“Políticas sociales, pobreza y trabajo en el neoliberalismo”***, de Carlos Arze Vargas, el **Proyecto Control Ciudadano** desea contribuir al debate de la pobreza y la política social en Bolivia. Nos parece pertinente, además, iniciar el intercambio de criterios y argumentos, pues pronto el país deberá discutir de manera más amplia la forma de encarar una Estrategia de Reducción de la Pobreza en el marco de los acuerdos con organismos multilaterales de cooperación.

Gustavo Luna Terrazas
Coordinador
Proyecto Control Ciudadano

El significado de la política social

La política social es definida por algunos expertos como “una acción del Estado que busca la redistribución de bienes y servicios que, por un lado, asegure la satisfacción mínima de necesidades básicas de toda la población, y por otro, provea de éstos a aquellos grupos que de otro modo no podrían acceder a ellos”¹. Esta definición implica, entonces, que el Estado interviene cumpliendo cierto principio de responsabilidad social sobre las condiciones de vida de su población.

Esta concepción genérica de política social ha cambiado en el transcurso de la historia reciente. En la etapa anterior al neoliberalismo o de vigencia del Estado Benefactor, la política social adquirió una importancia muy grande, derivada de la propia concepción de la teoría keynesiana que entendía que el Estado debería intervenir universalizando “oportunidades para el intercambio ‘libre’ o no regulado del trabajo y capital, interviniendo en ese proceso de intercambio”²; es decir, que la intervención pública debería ser complementaria a la acción del mercado, o mejor, que debería compensar las injusticias sociales producidas por el mercado.

En la presente etapa, el neoliberalismo restaura la concepción liberal de la excelencia del mercado para resolver el conjunto de los problemas sociales. Despliega toda su ideología fundamentada en el individualismo, en la supuesta perennidad del mercado, en la racionalidad instrumental, etc. para desestructurar toda la institucionalidad del estado interventor. De este modo, la política social se subordina totalmente a los objetivos de eficiencia del sistema económico, reduciendo dramáticamente la intervención estatal.

En verdad, la llamada “política social” tiene su origen moderno en la asunción por parte de los Estados capitalistas de las políticas inspiradas por la teoría keynesiana anti-cíclica. Así como la creación de instituciones y el establecimiento de políticas que estimularon la concertación social, tales como la OIT y, en su tiempo, la creación de la ONU, la generación de servicios sociales a cargo del Estado respondieron a una particular situación de conflictos sociales que amenazaban con destruir el orden establecido.

La existencia de pobreza puede desembocar en el cuestionamiento del orden económico y político, por lo que es interés general de la clase capitalista su reducción hasta niveles tolerables. En este sentido, la asignación de responsabilidades sociales al Estado es el resultado de una específica correlación de fuerzas entre las clases sociales.

La intervención estatal en el orden económico, que pretende restaurar el proceso normal de acumulación capitalista, viene acompañada por una institucionalidad dedicada a la prestación de servicios sociales que atenúen los efectos de la

¹ Pérez, Ernesto. **La orientación de la política social y el programa HIPC**, Cedla, La Paz, 2000.

² Portillo, José. **Política social del neoliberalismo y la infancia**, página web de la Revista Cubana de Salud Pública, 1997.

difundida destrucción de fuerzas productivas que ocasiona indudablemente la escasez de medios de vida para la población. El Estado benefactor, entonces, socorre a la población en espera de una reactivación de la economía y una consecuente resolución de los problemas sociales por la vía del crecimiento económico. El límite de la acción estatal, aún en su etapa keynesiana, es, por lo tanto, la restauración plena de las fuerzas libres del mercado.

En la presente etapa de hegemonía del neoliberalismo, correspondiente a la denominada globalización económica, la política social asume rasgos más limitados en cuanto a su cobertura y contenido. El neoliberalismo, como ideología de la actual etapa del capitalismo, es el sinceramiento del capital luego de la derrota del socialismo soviético, considerado una alternativa suya. El capitalismo triunfante, más específicamente su versión liberal-conservadora, se dirige a destruir toda la institucionalidad y el contenido de la política social ante la ausencia de fuerzas sociales que impongan demandas relativas al mejoramiento de las condiciones de vida; en este sentido, no necesita preocuparse de intervenir para restaurar el equilibrio capitalista. Por lo general esta tarea se ha desarrollado en el marco de un sistema político que logró alinear a gruesos sectores sociales detrás del axioma “libertad económica es igual a libertad política”, es decir, haciendo sinónimos el liberalismo económico con la democracia representativa burguesa.

Un conjunto de elementos conceptuales fueron emergiendo como justificación del abandono por parte del Estado de la concepción keynesiana: la intervención estatal en el manejo de la economía provoca las desigualdades, la ineficiencia en la asignación de recursos evita el logro de resultados en el ámbito social, produciendo en cambio su profundización, etc. A partir de ellos, el neoliberalismo pretende restaurar la vigencia irrestricta de las fuerzas de mercado en la determinación de las condiciones de vida de la población. Además, funcionaliza la acción estatal en materia social al objetivo de restaurar y fortalecer la capacidad de acumulación del capital, a través de la orientación de los servicios sociales que busquen la elevación de la productividad del trabajo.

La orientación de la política social en Bolivia

En nuestro país, la frustrada experiencia del reformismo de la UDP, en el marco de la extendida crisis internacional de la deuda, permitió que las fracciones más conservadoras de la burguesía retomaran el control de la economía y la política, sometiendo la definición de las políticas públicas a los dictados de los organismos financieros internacionales.

De este modo, las políticas inspiradas en el dogma neoliberal supusieron el paulatino repliegue del Estado de toda actividad económica y la asunción de un nuevo rol en el que destaca la función normativa. Así como las políticas macroeconómicas, las llamadas políticas sociales deberían fundamentarse en la vigencia de las fuerzas del mercado para alcanzar no sólo la eficiencia en el uso de los recursos, sino, fundamentalmente, en la consecución del crecimiento económico, como única forma de lograr sostenibilidad.

Las etapas que ha recorrido la política social son, básicamente, coincidentes con los períodos gubernamentales que han administrado el programa de ajuste estructural (PAE).

En el primer período 1985-1989, la política social se concentra en acciones de tipo asistencial, obligada por la reducción absoluta de recursos estatales y en función de compensar los efectos resultantes de la aplicación de las políticas de estabilización económica. En esta fase inicial del PAE, prevalece la visión del “rebalse”, que supone que como producto del crecimiento económico, sobrevendrá de manera casi natural, la mejoría de las condiciones sociales de la población.

Es el período de vigencia de los fondos sociales de emergencia y de una reducción absoluta de los recursos destinados a la cobertura de los servicios sociales esenciales, aunque la participación relativa del área social en el gasto público se vea incrementada (ver Cuadro No. 1).

En el segundo período, 1989-1993, se produce un viraje con la elaboración en 1991 de la Estrategia Social Boliviana, que pretende adecuar la política social a “las reformas estructurales fundamentadas en una concepción de economía de mercado”, a través del concepto de “capital humano”³. La introducción de este concepto significaría, en criterio de los especialistas, el principal giro realizado por la política social, pues implica que las acciones estatales se dirigen a dotar de “capital humano” a la población, es decir, de una serie de condiciones y capacidades que le permita elevar la productividad del trabajo y mejorar sus condiciones de vida.

Esta modificación, además, derivará en la introducción de criterios estrictamente económicos como la focalización, la eficiencia de las intervenciones, etc. Basado en esos criterios, el gobierno dispone que la política social debe dirigirse preferentemente a dotar de capital humano a los segmentos más pobres, a los que denomina “la Bolivia marginada” y “la Bolivia olvidada”, constituidos por el sector informal urbano y los pobladores del área rural, respectivamente.

En este período, contrariamente a las preocupaciones relativas a la teorización de la política social, los recursos estatales destinados a la provisión de servicios esenciales muestran una reducción relativa frente a los destinados a sectores no sociales (Cuadro No. 1) y la inversión sigue concentrándose en saneamiento básico y urbanismo-vivienda. Sin embargo, en el área institucional se difunde la creación de varios fondos de inversión social (FIS, FNDC, FNDR).

En el período 1993-1997, la política social incorpora el concepto del Desarrollo Humano, enfoque que no rompe con el anterior de “capital humano”, sino que los amplía con elementos sociales, culturales y políticos. De esta manera, se impone una nueva generación de reformas sociales como la Reforma Educativa, la

³ Conapso, **Estrategia Social Boliviana**, La Paz, 1991.

privatización de la Seguridad Social y se modifica la institucionalidad respectiva mediante la aplicación de la Ley de Participación Popular, la Ley de Descentralización y la Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo.

En este período se da el hecho contradictorio de que mientras la inversión pública muestra un incremento de los recursos destinados a los sectores sociales, particularmente los dirigidos a la educación, en el caso del gasto público total, el sector social reduce su participación relativa, principalmente por la limitación de las mejoras salariales de los trabajadores de la educación (Cuadro No.1).

Finalmente, el actual gobierno continúa con la misma orientación en la política social, aunque de manera más persistente enfatiza que se debe alcanzar la unidad entre política económica y social, a través de la fijación, como objetivo general de la gestión estatal, la lucha contra la pobreza. En sentido estricto, habrá que decir que este discurso no es más que la asunción de una “estrategia global de mitigación de la pobreza” propugnada por el Banco Mundial⁴ y que sirve de marco de aplicación de los convenios con los organismos financieros internacionales. En el último tiempo, esta orientación está presente en el programa de reducción de la deuda (HIPC), que constituye el más importante mecanismo de aplicación para los futuros 15 años.

Gasto público para financiar la política social

En el balance general del comportamiento del gasto público, se debe anotar que, durante más de una década de aplicación del PAE, éste tuvo su incremento restringido debido a las políticas fiscales determinadas por los acuerdos con organismos internacionales y, en los últimos años, por la escasez de recursos como producto de la privatización de las empresas públicas y por la asunción de pasivos de las reformas económicas y sociales (empresas y sistema de seguridad social). En consecuencia, se destaca que, pese a todos los cambios en términos conceptuales e institucionales, el gasto social en más de una década no alcanzó siquiera a duplicarse, desmintiendo la presunta priorización de la lucha contra la pobreza⁵.

⁴ Banco Mundial, **Informe No. 15272-BO Bolivia: pobreza, equidad e ingreso**, 1995.

⁵ De acuerdo a UDAPE, existiría un incremento significativo -180 %- entre 1990 y 1997 del gasto social. La diferencia de esta estimación con respecto a la que tomamos en el cuadro de referencia se debe fundamentalmente a la metodología utilizada por UDAPE para medir el gasto social según funciones, que incorpora “además de los gastos de la entidad cabeza de sector, gastos en esos sectores efectuados por otras instituciones de la Administración Central” Cfr. UDAPE, **Bolivia: Gasto social y la iniciativa 20/20**, La Paz, 1998. De todas maneras, el cuadro utilizado para los fines de este documento toma en cuenta la clasificación que normalmente se utiliza para la elaboración del Presupuesto General de la Nación. Asimismo, se toma en cuenta un período mayor –desde 1985 hasta 1996, es decir una década de ajuste estructural– al que toma como referencia UDAPE.

Cuadro No. 1
Bolivia: Gasto público (Millones de Bs. de 1990)

	TOTAL	SOCIAL	% SOCIAL
1985	3,377	733	21.7
1986	2,424	416	17.2
1988	1,884	732	38.9
1989	1,817	756	41.6
1992	2,669	859	32.2
1993	3,238	1,028	31.7
1996	4,466	1,273	28.5
Incr.Anual	2.57	5.14	
Incr.Acum.	32.26	73.55	

Fuente: Pérez, E. "La orientación de la política social y el programa HIPC", Cedla, 2000.

El uso de los recursos públicos destinados al financiamiento de la política social estuvo, además, sujeto a los cambios de orientación o enfoque de la misma en cada período de gestión gubernamental. Un rasgo que destaca es la ineficiencia persistente del gasto público (en la que no está ausente la corrupción) que deviene en una insuficiente cobertura y mala calidad de los servicios⁶. En la primera etapa de la política social neoliberal, el presupuesto estatal de gastos destinados al área social culmina casi todos los años con un bajo nivel de cumplimiento. En las etapas posteriores, es frecuente que las metas de los diferentes programas no sean alcanzadas plenamente, pese a que el presupuesto tiene ya un nivel de cumplimiento más elevado.

Cuáles son los resultados en materia social

Como se ha indicado, el concepto vinculante de las políticas sociales, a partir de las directrices emanadas del Banco Mundial, ha sido a lo largo del período (aunque con distintos énfasis en cada subperíodo) la lucha contra la pobreza.

La operativización del mismo ha recurrido a los métodos convencionales de medición: las necesidades básicas insatisfechas y la línea de pobreza por ingresos.

En 1992 se realiza el Censo Nacional de Población y Vivienda, que permite conocer las condiciones de vida de la población y sirve para generar el Mapa de la Pobreza basado en el método de NBI, que determina que el 70% de la población boliviana vive en estado de pobreza, correspondiendo al área rural el mayor porcentaje de pobres, con un 94% de su población en estado de pobreza; en tanto que la población urbana pobre alcanza sólo al 51%. Estos datos comparados con los publicados en el lejano censo de 1976, revelaban una reducción irrelevante de la pobreza en el campo, que pasa de 98% a 94% en ese lapso de años, y una reducción mayor de la pobreza en el caso del área urbana, que cae de 65% a

⁶ Banco Mundial, op.cit.

51%. Una última medición de UDAPE, afirma que la pobreza en 1997 en el área rural alcanza al 87% y en el área urbana al 40% de la población total de cada una de ellas⁷.

Respecto a la medición de la pobreza a través del método de la línea de pobreza, se debe afirmar que no existen estudios oficiales que abarquen periodo más o menos grandes. Por tal motivo, referimos aquí los datos correspondientes a mediciones realizadas por un economista experto en el tema, los mismos que guardan algunas diferencias no sustanciales con las provenientes de fuentes oficiales como UDAPE o la propia CEPAL.

Cuadro No. 2
Bolivia: Incidencia de pobreza

Año	Indigentes	Pobres no indigentes	Pobres
1976	0.60	0.20	0.80
1990	0.41	0.30	0.71
1996	0.47	0.25	0.72
1996	0.44	0.24	0.68
1997	0.36	0.24	0.60

Fuente: Morales, R. "Política económica, geografía y pobreza", UASB, La Paz, 2000.

Como se puede observar, los datos revelan que ha habido una reducción del orden del 25% de la pobreza en Bolivia en el transcurso de 21 años. Asimismo, que la reducción más importante se ha producido en el estrato correspondiente a la población indigente.

Para el periodo de aplicación del PAE, tenemos que en la década de los 90 la pobreza ha mostrado una tasa acumulada de 15%, rebajando de 71% de la población a 60%, correspondiendo el mayor descenso al segmento de la población no indigente. Este resultado se explica por una elevación extraordinaria de la población pobre no indigente en los años previos a 1990, probablemente por efecto de las políticas de estabilización aplicadas.

Es preciso aclarar que estas cifras corresponden a líneas de pobreza diferentes para cada año, las mismas que han tenido valores monetarios bastante reducidos, como lo muestra el siguiente cuadro.

Cuadro No. 3
Valor mensual per cápita de líneas de indigencia y pobreza (en dólares)

Año	Indigencia	Pobreza
1976	25.8	46.8
1990	24.9	63.9
1996	30.0	60.0

Fuente: elaboración propia en base a Morales, R. "Política económica, geografía y pobreza", UASB, La Paz, 2000.

⁷ UDAPE, **Bolivia: prospectiva económica y social 2000-2010**, PNUD, La Paz, 2000.

Un dato que destaca en el siguiente cuadro, es el correspondiente al índice de Gini, indicador de desigualdad en los ingresos, el mismo que revela que éstos se han distribuido de manera por demás desigual en el país, pero que, además, esta inequidad se ha incrementado con el tiempo. Es más, este indicador revela que la desigualdad en la distribución del ingreso en los años recientes es considerablemente mayor a la que se presentaba en la década de los 70⁸.

Cuadro No. 4
Índice de desigualdad del ingreso

Años	Índice GINI %
1976	49.00
1990	51.71
1996	53.43
1996	55.53
1997	56.20

Fuente: Morales, R. "Política económica, geografía y pobreza", UASB, La Paz, 2000.

La importancia de este indicador radica en que permite observar un fenómeno cuya magnitud es ocultada por el dato de la reducción relativa de los niveles de pobreza medidos mediante el uso de una línea de pobreza calculada a partir del dato básico de los valores mínimos de una canasta alimenticia que satisface ciertos requerimientos nutricionales convencionales. El índice de Gini cobra relevancia porque permite dilucidar la forma en que la creación de valor se distribuye en la forma de ingresos, lo que incorpora un elemento crucial referido a la relatividad del concepto de pobreza. En otras palabras, lo más importante no es la magnitud de personas que se hallan por debajo de una línea de pobreza, sino la forma en que la creación de valor proveniente del trabajo se reparte entre la población, valor que al ser creciente supondría la posibilidad de niveles normativos de consumo más altos que los "normales" que establece la línea de pobreza convencional.

Necesidad de una visión crítica de la pobreza y de la política social

Las consideraciones anteriores nos dan pie para enfatizar la necesidad de una visión crítica de las nociones de pobreza y política social que utiliza actualmente el neoliberalismo. Las razones para este enfoque crítico surgen, en primera instancia, de una certeza: si se persiste en un análisis enmarcado en la propia lógica del modelo, entonces se confunde la esencia de los fenómenos sociales

⁸ Existen diferencias de la estimación de este indicador elaborado por Morales con otro difundido por la CEPAL. De acuerdo a un informe preparado por esta última institución, el índice de Gini habría tenido un descenso entre 1990 y 1997: de 48.4% a 45.5%. Existe una gran diferencia entre la tendencia concentradora señalada por la estimación elaborada por Morales y la realizada por la CEPAL; esta situación puede ser explicada por la metodología utilizada por la CEPAL, que calcula el índice de Gini a partir de la distribución de los ingresos per cápita de los hogares por grupos decílicos. Cfr. CEPAL. **La brecha de la equidad. Una segunda evaluación.** Santiago de Chile, mayo de 2000. La razón para elegir la estimación de Morales se debe fundamentalmente a que toma un periodo de más de 20 años, en el que la concentración del ingreso parece haberse pronunciado mucho más a partir de 1990.

con sus expresiones epidérmicas; por otra parte, si es que se permite el predominio de la ideología neoliberal en la interpretación de los problemas sociales, entonces se planteará una forma de complicidad sobre sus efectos nocivos.

Como se ha mencionado al principio de este documento, la concepción neoliberal acerca de la política social no es extraña a la concepción general de la ideología capitalista, que la considera como una forma funcional para garantizar el normal desarrollo de la economía basada en la expropiación del trabajo y para enfrentar el peligro de conflictos sociales que cuestionen el dominio del capital.

En el mismo marco, la concepción de la pobreza que ostenta tal ideología elude toda consideración al hecho esencial de que en la economía capitalista, la posibilidad de disfrute de los beneficios de la actividad productiva y la creación de riqueza –y por tanto la posibilidad de su ausencia, es decir la pobreza– está determinada por la relación que cada individuo tiene con el control y dominio del proceso de producción, es decir, con la propiedad de los medios de producción. Al hacerlo, oscurece la visión acerca de las causas de la pobreza, atribuyéndola, en algunos casos, a la acción fortuita de fuerzas naturales o a la asunción de decisiones inapropiadas de los sujetos para aprovechar las supuestas “oportunidades” que ofrece la economía. Asimismo, acaba restringiendo el concepto de pobreza a la ausencia de determinado nivel de consumo, obviando la consideración de todo otro rasgo que denote las condiciones de reproducción social de los individuos, tales como los aspectos culturales, étnicos, de género, etéreos, etc.

El desarrollo de los conceptos de capital humano y desarrollo humano en cierto modo reflejan los esfuerzos de los teóricos del capitalismo por hacer lo menos evidente posible la distancia entre la ideología y la realidad de las condiciones sociales. En este sentido, han intentado incorporar referencias cada vez más frecuentes a la relación estrecha que se establece entre trabajo y pobreza.

En el caso nacional, las entidades oficiales han desarrollado diversos estudios encuadrados en estas teorías, que reflejan que las carencias en términos de ingresos están ligadas al insuficiente “capital humano” de las personas o al insuficiente acceso a factores de producción, como es el caso de muchos sectores como el informal o la pequeña producción campesina. Sin embargo, aún estas evidencias prácticas tienen que esconderse detrás de la ideología oficial para evitar todo cuestionamiento a los resultados del modelo neoliberal. De ahí que concluyen que la persistencia de la pobreza y su insensible reducción, amén de ser una deuda ancestral, se deben a imperfecciones del mercado que pueden ser superadas o que los resultados insatisfactorios son producto de un inadecuado diseño de los servicios o de la mala gestión de los mismos. Este tipo de argumentos evitan siempre mencionar los estatutos fundamentales de la creación de riqueza en el capitalismo que son, en definitiva, los que determinan la persistencia de la pobreza.

Las recomendaciones que orientan la política social: focalización del gasto en los más pobres o en los grupos más vulnerables, y la inversión en capital humano, se limitan al objetivo de generar las condiciones de estabilidad social y de mejora de la productividad laboral, como condiciones para alcanzar el crecimiento económico y la competitividad de las empresas; es decir, que la mejora de las condiciones de vida depende de la capacidad de los individuos de competir en el mercado basados en las capacidades alcanzadas gracias al gasto público. Aquí no cabe la mención a la responsabilidad social sobre el fenómeno de la pobreza sino una pura y simple responsabilidad individual para competir en el mercado laboral.

Pero es el propio neoliberalismo el que ha impulsado los cambios más profundos en el mundo del trabajo, ocasionando un mayor grado de explotación de la fuerza de trabajo y la permanencia del círculo de la pobreza. En efecto, la aplicación de las medidas de corte neoliberal ha determinado la precarización de las condiciones laborales de manera extrema, en función de otorgar las más ventajosas condiciones de competitividad para las empresas.

Cuadro No. 5
Precarización del empleo y las condiciones laborales

Empleo	El sector informal emplea casi al 70% de los ocupados urbanos. Ocho de cada diez empleos nuevos son generados por el sector informal. Existe predominio de trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados. El subempleo alcanza al 53% de los ocupados urbanos, lo que significa un desempleo equivalente de 25% frente a una tasa oficial de 4.4% en 1995.
Inestabilidad laboral	El 25% de los asalariados urbanos son eventuales y muchos de ellos permanecen en esa condición por más de 1 año. El empleo por tiempo parcial llega al 39% en el sector público, al 14% en la empresa privada y al 22% en el sector informal.
Aumento del tiempo de trabajo	La jornada semanal promedio se extiende a 49 horas en el sector público, a 55 en el empresarial y a 54 horas en el informal. Los trabajadores que realizan jornadas adicionales en otra ocupación alcanza a 16% en el Estado, 7% en la empresa privada y 6,5% en el informal. La edad de jubilación se ha extendido hasta los 65 años.
Ingresos laborales	Los ingresos de los obreros han aumentado 1.3% anualmente, frente al aumento de 4.2% como promedio del producto.
Seguro de salud y otros beneficios	El acceso de los asalariados ha caído en todos los sectores y es particularmente bajo en la empresa privada (33%) y en el sector informal (19%). Casi un 47% de los asalariados urbanos no accede a beneficios como aguinaldos, primas y bonos, establecidos por ley.

Fuente: elaboración propia basada en INE, EIH's y ENE's.

La inestabilidad del trabajo, marcada por el crecimiento inusitado de la eventualidad y el trabajo por tiempo parcial; el incremento del tiempo de trabajo

mediante la extensión absoluta de la jornada diaria de trabajo, la aplicación de nuevas formas de remuneración que alargan el período de utilización de la fuerza de trabajo o la extensión de la vida activa de los adultos a través de la privatización de la seguridad social; la difusión ilimitada del subcontrato, el trabajo a domicilio y la maquila; la presencia más frecuente de formas aberrantes de explotación infantil y de mujeres jóvenes; el crecimiento depauperante de la informalidad; el ingreso de los obreros que aumenta anualmente menos que el producto; etc., son los rasgos que reflejan las condiciones reales de reproducción de la población.

El aprovechamiento de las condiciones que brinda la hegemonía universal del neoliberalismo, se ha traducido en la imposición de formas de organización del trabajo que se inscriben en lo que se ha venido a llamar “taylorismo salvaje”, en sustitución de toda la estructura previa caracterizada por el predominio de un sistema fordista de relaciones laborales. La aplicación parcial de las nuevas formas de organización participativa se ha combinado con la adecuación de formas atávicas de control del proceso de trabajo, aprovechando la extendida presencia de la informalidad, para reducir los costos laborales y para mejorar la extracción de plusvalor a través de la agudización de la competencia entre trabajadores y la expropiación de su experiencia.

Este es, entonces, el núcleo de la estrategia competitiva que la clase capitalista ha optado y que no puede calificarse sino como espuria, es decir insostenible, en la medida en que se basa únicamente en la posibilidad de reducción de los costos laborales en ausencia de un proceso de modernización productiva. Pero, además, representa la forma concreta en que se desarrolla el proceso de valorización del capital en esta época neoliberal, que lleva a extremos insospechados la explotación del trabajo y la enajenación del trabajador. Es ahí donde podemos ubicar verdaderamente la raíz de la pobreza, comprendida como un fenómeno que entraña no sólo la carencia de determinados medios de vida, sino la completa alienación de las capacidades del trabajador para decidir y controlar la actividad vital del trabajo y el destino de su producto.

Sólo así podemos comprender la evidente contradicción entre el incremento de la potencia productiva de la sociedad y la persistencia de la pobreza, entendida esta última como un nivel convencional de consumo mínimo; solamente así podremos esbozar explicaciones más profundas sobre la creciente brecha entre ricos y pobres, en el sentido de una regularidad necesaria de la acumulación capitalista y no sólo vista como un efecto no deseado del crecimiento económico.

Por todas estas razones, se puede concluir que la política social y sus objetivos – ahora más que nunca- son una expresión cínica de la ideología capitalista, pues sólo cumplen el rol de ocultar las causas esenciales de la perpetuación de la pobreza. En este sentido, la reducción de la pobreza como concreción de dicha política, sólo va a ser posible forzando los recursos teóricos de su definición o los presupuestos contenidos de su medición.

BIBLIOGRAFIA

- Banco Mundial. **Informe No. 15272-BO Bolivia: pobreza, equidad e ingreso**, 1995.
- CEPAL. **La brecha de la equidad. Una segunda evaluación**. Santiago de Chile, mayo de 2000.
- CONAPSO. **Estrategia Social Boliviana**, La Paz, 1991.
- Morales, Rolando. **Política económica, geografía y pobreza**. UASB. La Paz. 2000.
- Pérez, Ernesto. **La orientación de la política social y el programa HIPC**, Cedla, La Paz, 2000.
- Portillo, José. **Política social del neoliberalismo y la infancia**, página web de la Revista Cubana de Salud Pública, 1997.
- UDAPE, **Bolivia: Gasto social y la iniciativa 20/20**, La Paz, 1998.
- UDAPE, **Bolivia: prospectiva económica y social 2000-2010**, PNUD, La Paz, 2000.